



***Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal
del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá***

Panamá, veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

INCIDENTE DE CONTROVERSIA N° 26

En estado de resolver se encuentra el incidente de controversia presentado por el Licenciado Miguel Angel Delgado contra la diligencia fechada 20 de mayo del 2016 dictada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso que se le sigue a **EDUARDO ENRIQUE JAÉN LIMNIO** y otros por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social.

ANTECEDENTES

PRIMERO:

El Licenciado Miguel Angel Delgado presentó incidente de controversia contra la diligencia fechada 20 de mayo del 2016, dictada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso seguido a **EDUARDO ENRIQUE JAÉN LIMNIO** y otros, por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social.

Argumentó el incidentista, que la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, dispuso mediante resolución fechada 20

de mayo del 2016, compulsar copias a la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, bajo el mismo análisis jurídico y utilizando el mismo fundamento legal que había servido de base para ordenar la indagatoria de Eduardo Enrique Jaén Roy, Ariana Lorena Jaén Roy de Barletta y Aracelli María Roy Correa de Jaén, citando los mismos depósitos de dinero y las mismas cuentas bancarias en las que aparecían como firmantes los señores Eduardo Enrique Jaén Roy, Ariana Lorena Jaén Roy de Barletta y Aracelli María Roy Correa de Jaén.

Continuó señalando el abogado, que su incidencia se fundamentaba en la flagrante violación del debido proceso, las garantías fundamentales y los principios procesales que debían regir en todo proceso penal, como lo era la violación al contenido del artículo 1949 del Código Judicial que vulnera los principios de conexidad y unidad del proceso, así como la prohibición del doble juzgamiento contenida en el artículo 7 del Código Procesal Penal, el cual resulta importante resaltar, ya que este principio contenido en el Código Procesal Penal, se encuentra vigente en todo el territorio nacional y le da un nuevo sentido al significado del doble juzgamiento, ya que no sólo implica que la persona fuera juzgada nuevamente por un mismo delito, sino que extiende su alcance a no ser investigado dos veces por un mismo hecho, situación que claramente se aplica al caso que nos ocupa.

Señaló además el incidentista, que era evidente que los elementos constitutivos de la imputación formulada por la Fiscalía Sexta

Anticorrupción en la diligencia indagatoria N° 36 del 6 de mayo del 2016, contra los señores Eduardo Jaén Roy, Ariana Lorena Jaén Roy De Barletta y Aracelli María Roy Correa de Jaén como personas firmantes autorizadas de la cuenta bancaria en Multibank a nombre de Eduardo Jaén Roy, y en la cuenta bancaria en Global Bank a nombre de Great Falls Investment Corp, S.A., donde eran partícipes, porque se hicieron depósitos de dinero, producto de los delitos contra la administración pública (peculado y corrupción de servidores públicos), cometidos presuntamente por el señor Eduardo Jaén Limnio, son los mismos hechos utilizados por el Fiscal Sexto Anticorrupción, para ordenar la compulsa de copias, mediante diligencia de 20 de mayo de 2016, para que se iniciara otra investigación penal por los mismos depósitos de dineros, producto de los delitos contra la administración pública.

Por otro lado afirmó el apoderado judicial, que era incongruente que la Fiscalía Sexta Anticorrupción dispusiera que se compulsaran copias, mediante diligencia del 20 de mayo del 2016, para que se investigara por posible delito de blanqueo de capitales, los mismos depósitos en las mismas cuentas bancarias donde aparecían como firmantes los señores Eduardo Jaén Roy, Ariana Lorena Jaén Roy de Barletta y Aracelli María Roy Correa de Jaén, cuando en este sumario, ya se había tipificado e indagado por estos mismos hechos.

Argumentó el incidentista, que con la resolución atacada vía incidente, la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación,

desconocía la unidad del proceso y avocaba a la duplicidad del mismo hecho punible bajo otra denominación, lo que traía como consecuencia la ilegalidad de esta resolución y la nulidad de lo actuado, por contravenir los mandatos procesales, establecidos en la Constitución Nacional y leyes internacionales.

Por otro lado, afirmó que con esta resolución de compulsar de copias, para iniciar una nueva investigación, la agencia de instrucción, perdía de vista el control de convencionalidad contenido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que recoge el artículo 2 del Código Procesal Penal, referente al principio de legalidad y obligatoriedad de atacar los tratados y convenios internacionales.

Señaló el incidentista, que si el Fiscal Sexto Anticorrupción consideraba que se había vulnerado con los mismos hechos otra conducta delictiva, lo jurídicamente procedente en este caso es acumular ambas investigaciones, vulnerando con su actuación, las normas de procedimiento penal, de acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 1949 y 2288 del Código Judicial.

Solicitó el abogado, que se declarase lugar al incidente de controversia y se dejara sin efecto la diligencia fechada 20 de mayo del 2016, emitida por la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (fs. 2-12 del cuadernillo)

SEGUNDO:

Mediante diligencia calendada 14 de julio del 2016 (fs. 97 del cuadernillo), se le corrió traslado al Ministerio Público, quienes al presentar su escrito de contestación de traslado manifestó que la Fiscalía Séptima Anticorrupción era el despacho especializado en delitos de blanqueo de capitales, tal cual se había planteado mediante resolución de 22 de marzo del 2016, proferida por la Procuraduría General de la Nación, que dictaba disposiciones para la agilización y descarga de las causas de las Fiscalías Anticorrupción, por ende, si el despacho tenía conocimiento de la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, por esta especialidad correspondía a ese despacho investigar, sin que esta sea considerada como doble juzgamiento. Ello es dable, en el ejercicio de la acción penal y estrategia de investigación de la entidad fiscal y debido a la complejidad que enmarca el delito de blanqueo de capitales cuando existe una diversidad de sujetos investigados, todo en atención al artículo 5 del Código Procesal Penal.

Por otro lado señaló, que si bien el artículo 2413 del Código Judicial, establecía que si resultara del proceso que se había cometido algún otro delito, se compulsará copia de lo conducente y se remitiría al agente del Ministerio Público respectivo, para que lo investigara, pero en dicho precepto no se infería que el Fiscal debía solicitar al Juez autorización para poder iniciar un sumario por un hecho punible perseguible de oficio que, presuntamente, se hubiera cometido y que sus perfiles aparezcan esbozados en el proceso que transitan por la fase de investigación, bien

podía el fiscal de la causa compulsar copias del proceso para que fuera investigado en la esfera correspondiente y lo anterior cobraba vigencia, desde la perspectiva procesal adversarial donde el monopolio de la acción penal, dependía exclusivamente del Ministerio Público y donde se desprendía normativamente que la función de investigación están separadas de la función jurisdiccional, por lo que correspondía exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación.

Culminó solicitando el señor Fiscal, que se negara el incidente de controversia presentado por el Licenciado Miguel Angel Delgado Bravo a favor de Eduardo Enrique Jaén Limnio (fs. 99-106)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Luego de un análisis de la argumentaciones propuestas por el defensor particular del señor Eduardo Enrique Jaén Limnio y las constancias procesales insertas en autos, se advierte que la disconformidad del incidentista se centra en la diligencia emitida por la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, fechada 20 de mayo de 2016, en la que se dispuso remitir copias debidamente autenticadas a la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se realizaran las investigaciones por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con la comisión del delito contra la administración pública (fs. 13787-13804)

Al entrar en el análisis del artículo 2413 del Código Judicial, que regula la figura de la compulsa de copias, se observa que el precepto señala que si resultara del proceso que se ha cometido algún otro delito, se compulsará copia de lo conducente y se remitirá al agente del Ministerio Público respectivo, para que lo investigue.

Este tribunal conceptúa en este orden, que la normativa es clara al preceptuar taxativamente, que si resultara del proceso que se ha cometido otro delito se compulsarán copias para que se investigue lo conducente y no se observa que la normativa haga alusión a que el propio Ministerio Público ordenará compulsar al mismo Ministerio Público, como se desprende de la diligencia fechada 20 de mayo del 2016, que fuera dictada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, cuando provenga de una investigación, sino del proceso, lo que evidencia que el caso debe estar en los tribunales y la compulsa debe ser decidida por el Juez de la causa. Ello, tomando en cuenta que del escrito de contestación de traslado (fs. 105), así como de las constancias procesales insertas en autos, se desprende que a la fecha, el sumario seguido a Eduardo Jaén Limnio y otros, por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social se encuentra aún en fase de investigación.

Lo procedente es que el Ministerio Público solicite la compulsa de copias en su Vista Fiscal y compete es al Juez decidir al respecto, lo cual se evidencia claramente del contenido del citado artículo 2413 del Código Judicial.

Cabe acotar, que la normativa antes señalada no indica que se deba solicitar autorización al Juez, sino que, justamente, el juzgador es el que al decidir la situación jurídica del proceso, si observa que se ha cometido otro delito, es el que debe ordenar la compulsa de copias respectiva al Ministerio Público, para que se inicien las nuevas investigaciones.

Por todo lo anterior, lo procedente es **DECLARAR PROBADO** el incidente de controversia promovido por el Licenciado Miguel Angel Delgado contra la diligencia fechada 20 de mayo del 2016, por medio de la cual la Fiscalía Sexta Anticorrupción ordenó la compulsa de copias autenticadas a la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se realizaran las investigaciones por el delito de blanqueo de capitales, lo cual le corresponde al Juez decidirlo en la fase intermedia del proceso penal que rige esta causa, tal como lo señala el artículo 2413 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, quien suscribe, **JUEZ DÉCIMO TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA**, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA PROBADO** el incidente de controversia promovido por el Licenciado Miguel Angel Delgado contra la diligencia fechada 20 de mayo del 2016, que ordena la compulsa de copias por delito de blanqueo de capitales dentro del proceso seguido a **EDUARDO JAEN**

LIMNIO por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social y, en consecuencia, se deja sin efecto.

Disposiciones Legales Aplicadas: Artículos 697, 704, 2413 del Código Judicial.

Notifíquese,

Magistra ALINA HUBIEDO
Juez Décimo Tercera de Circuito de lo Penal
del Primer Circuito Judicial de Panamá

Lcdo. CARLOS CASTRO M.
Secretario Judicial

AH/f6
RUE-70239-16